



Ilustração: Marcelo Oliveira

Atilio A. Boron¹

Democracia y movimientos sociales en América Latina

Resumo: Intenciono nestas páginas examinar, em primeiro lugar, algunas questões em, torno da situação das democracias latino-americanas, em segundo lugar, discutir o papel dos movimentos sociais no marco dos processos democráticos em curso na região, e para terminar, uma terceira seção, com uma aproximação das alternativas que se abrem na atual conjuntura latino-americana.

Palavras-Chave: Democracias, Conjuntura Latino-Americana, Movimentos Sociais

Resumen: Me propongo en estas páginas examinar, en primer lugar, algunas cuestiones en torno a la situación de las democracias latinoamericanas; en segundo término, discutir el papel de los movimientos sociales en el marco de los procesos democráticos en curso en la región para terminar, en una tercera sección, con una aproximación a las alternativas que se abren en la actual coyuntura latinoamericana.

Descriptores: Democracias, Coyuntura Latinoamericana, Movimientos Sociales

Abstract: I propose in these pages to examine at first some questions about the situation of the Latin American democracies; in a second term, to discuss the role of the social movements within the framework of the democratic processes actually in course in the region. Finally in a third section, an approach of the alternatives that are opening in the present Latin American conjuncture.

Key Words: Democracies, Latin American Conjuncture, Social Movements

I. La situación de las democracias latino-americanas

Luego de más de un cuarto de siglo transcurrido desde que se iniciara el proceso de redemocratización es tiempo de efectuar un balance sobre sus asignaturas pendientes. Sus logros, lamentablemente, no han sido muchos. En algunos países, pero no en todos, ha habido un relativo fortalecimiento del estado de derecho y algunas libertades han sido garantizadas, en principio, para algunos segmentos de la población. En un puñado de países, muy minoritario, se logró reforzar la vigencia de los derechos

¹ Profesor titular de Teoría Política y Social I y II, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires – UBA, fue secretario ejecutivo de Consejo Latinoamericano de Ciências Sociales (CLACSO).

humanos y en un número aún menor se ha procurado llevar a los estrados judiciales a los responsables de las políticas criminales ensayadas por las “dictaduras de seguridad nacional” de los años setentas. Pero los procesos políticos continúan siendo profundamente condicionados por las clases dominantes y sus representantes políticos e ideológicos y la crisis de legitimidad afecta, en mayor o menor grado, a todos los gobiernos de la región. Los ciudadanos no se sienten representados y o bien se rebelan activamente contra esta situación – como en Argentina, Bolivia, Ecuador, entre otros – o bien se retiran, desilusionados, de la arena política condenando con su indiferencia y apatía ciudadanas a los gobiernos de turno. La desilusión campea en la región favorecida por la fórmula favorita del neoliberalismo, propagada incansablemente por sus voceros ideológicos en los medios de comunicación (controlados sin contrapeso alguno por los grandes monopolios) y la academia: “alternancia sin alternativas”, lo que en buen romance significa convalidar la fórmula que, en vísperas del triunfo electoral de Lula, en Octubre de 2002, acuñara el magnate húngaro-norteamericano George Soros cuando decía que “gane quien gane en Brasil gobernarán los mercados, como en todo el mundo.”

Si el balance político-institucional exhibe estas graves deficiencias, los resultados económicos de la reconstrucción democrática son aún más deplorables. Lejos de reproducir en esta parte del mundo lo ocurrido en la Europa de posguerra, en América Latina el pasaje de las dictaduras a la democracia estuvo acompañado por una creciente ingerencia de los “perros guardianes” del capital financiero internacional y las clases dominantes del imperio: el FMI, el Banco Mundial, el BID, la OMC. Consecuencia directa de ese control *de facto* que ejercían estas agencias fue la imposición de las políticas del Consenso de Washington y sus conocidas secuelas: precarización laboral y superexplotación de la fuerza de trabajo, recortes en los servicios sociales, concentración de los ingresos y la riqueza y acelerada exclusión social. En una palabra, mientras en “el cielo de la política”, para usar una expresión del joven Marx, se proclamaba el triunfo de la ciudadanía universal, en el prosaico terreno de la economía y la sociedad civil se desencadenaba un irresistible proceso de “desciudadanización” que erosionaba progresivamente la ya de por sí frágil legitimidad política de los gobiernos democráticos y que, ante los ojos de su población, los convertía en crueles estafas de la voluntad ciudadana.

Es por eso que en un trabajo reciente publicado por la revista inglesa de pensamiento socialista *Socialist Register 2006* (cuya versión en lengua española, que CLACSO publica desde el año 2004, estará a mediados de año disponible) he propuesto dejar de llamar democracias a los regímenes políticos que hoy reclaman ese nombre en la región. La razón es bien clara: si le preguntáramos al padre de la ciencia política, Aristóteles, si esos gobiernos reúnen los requisitos que él estableciera para caracterizar a un gobierno democrático su respuesta irrefutable sería que nuestras “democracias” capitalistas son cualquier cosa menos democráticas. Según la tipología aristotélica se trataría de regímenes políticos mejor identificados como “oligarquías” o “plutocracias,” es decir, gobiernos de minorías en provecho de los ricos. Traduciendo a un lenguaje contemporáneo la visión de Aristóteles y también la de Abraham Lincoln podría decirse que en lugar de ser “gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” nuestras “democracias” son gobiernos de los mer-

cados, por los mercados y para los mercados. O, si no, “regímenes políticos post-dictatoriales.” Estoy convencido de que denominar como “democráticos” a gobiernos como los que hoy prevalecen en la región, salvo algunas contadísimas excepciones, equivale a conferirles una distinción completamente inmerecida.

Un necesario paréntesis conceptual

Antes de avanzar es imprescindible introducir algunas precisiones en el lenguaje, so pena de tornar ininteligible nuestro discurso. Si la palabra “democracia” está plagada de ambigüedades – democracia ¿“de” quién?, “por” quién, “para” quién? – expresiones como “democracia capitalista” o “democracia burguesa” son aún más confusas e insatisfactorias. Por esa razón, la manera más rigurosa y precisa de hablar del universo de las democracias “realmente existentes” es denominarlas “capitalismos democráticos”. Veamos por qué.

En primer lugar porque hablar de la “democracia” sin ningún adjetivo implica pasar por alto las enormes diferencias entre:

- a) el modelo clásico de la democracia ateniense, inmortalizado en la célebre Oración Fúnebre de Pericles;
- b) las estructuras y prácticas democráticas incipientes desarrolladas en algunas ciudades en el norte de Italia en los albores del Renacimiento (y que luego serían aplastadas por la reacción aristocrático-clerical); y, por último,
- c) los distintos modelos de democracia que vieron la luz durante el siglo veinte en algunas sociedades del capitalismo avanzado.

La democracia es una forma de organización del poder social en el espacio público inseparable de la estructura económico-social sobre la cual dicho poder se asienta. Las distintas modalidades de organización de ese poder – tanto dictatoriales como democráticas – o las seis formas clásicas de régimen político plasmadas en *La Política* de Aristóteles hunden sus raíces en modos de producción y tipos de estructura social de suerte tal que cualquier discurso sobre la “democracia” que no especifique esas articulaciones se disuelve en la vaguedad y la confusión. Por eso, cuando hablamos de democracia, ¿de qué hablamos? De una democracia basada en la esclavitud, como en la Grecia clásica? ¿O de la que prosperó en unos pocos islotes urbanos rodeados por océanos de servidumbre feudal y en las cuales el *populo minuto* era apenas una masa de maniobra del patriciado oligárquico de Florencia o Venecia? ¿O hablamos de las democracias europeas de comienzos del siglo veinte, donde no había siquiera sufragio universal masculino y las mujeres estaban privadas de todo derecho político? ¿O nos referimos a las “democracias keynesianas” del período de posguerra y que portaban los rasgos de lo que T. H. Marshall quiso decir con ciudadanía social?

Al reaccionar ante esta desconcertante ambigüedad hubo quienes, como el ensayista mexicano Enrique Krauze, propuso el rescate de “democracia sin adjetivos”. No obstante, el hecho es que existe una enorme cantidad de “adjetivos” (más de quinientos) empleados por los politólogos para calificar el accionar de los regímenes democráticos a tal punto que existen más casilleros taxonómicos que regímenes democráticos. Pero los adjetivos no solucionan el problema esencial. Sólo sirven para colocar un taparrabo que no logra ocultar el hecho de que el rey está desnudo.

Tomemos la expresión “democracia capitalista”, empleada frecuentemente tanto por expertos en ciencias sociales del *mainstream* como también por académicos de pensamiento radical. ¿Qué significa precisamente? Algunos pueden creer que al agregar el modificador “capitalista” a la palabra “democracia” – que por lo menos insinúa el problema más amplio de las relaciones entre capitalismo y democracia y alude los límites que el capitalismo opondría a la expansividad de la democracia- el problema está resuelto. Sin embargo, este punto de vista es básicamente incorrecto porque se basa en la premisa, errónea a todas luces, de que en esta forma de régimen político el componente “capitalista” es un mero adjetivo que señale el tipo de ordenamiento económico que modifica y matiza el funcionamiento de una estructura política esencialmente democrática. La frase “democracia capitalista” implica, por esto mismo, una especie de “inversión hegeliana” de la relación existente entre la economía, la sociedad civil y el mundo político, convirtiéndose de este modo en una sutil apología de la sociedad capitalista. Es que en una formulación de este tipo la democracia aparece como la esencia de la sociedad actual – reafirmada habitualmente por incontables líderes del “mundo libre”, como George W. Bush, José M. Aznar, Tony Blair, etc., quienes se auto-definen como los portavoces de sus propias “sociedades democráticas” y, durante los años candentes de la mal llamada “guerra fría” como los exponentes de la “democracia” frente al “totalitarismo comunista.” De esta manera, la democracia está adjetivizada por un dato supuestamente accidental o “contingente” – ¡el modo de producción capitalista! De este modo el capitalismo es desplazado a una posición discreta, detrás de la escena política, e invisibilizado como el cimiento estructural de la sociedad contemporánea. Como una vez lo observara Bertolt Brecht, el capitalismo es un caballero que no quiere que lo llamen por su nombre. Pero hay más. Como argumentó el fallecido filósofo mexicano Carlos Pereyra, la expresión “democracia burguesa” es “un concepto monstruoso” porque “oculta una circunstancia decisiva en la historia contemporánea: la democracia se ha conseguido y preservado, en mayor o menor grado en distintas latitudes, *contra* la burguesía”.

Se comprueba, por consiguiente, una doble dificultad con el uso de la expresión “democracia burguesa”: en primer lugar, la que brota de atribuir gratuitamente a la burguesía una conquista histórica como la democracia, que precisamente fue el resultado del esfuerzo de siglos de luchas populares precisamente *contra* la aristocracia y la monarquía al principio y después contra la dominación de los capitalistas, quienes se afanaron en impedir o demorar la victoria de la democracia, recurriendo a cualquier medio imaginable, desde la mentira y la manipulación hasta el terror sistematizado, encarnado en el estado Nazi. En segundo lugar, porque si se acepta dicha expresión el adjetivo “burguesa” deviene en un dato casual y contingente, una especificación accesoria en relación a una esencia fetichizada llamada democracia.

Si esto es así, ¿cuál es la forma correcta de conceptualizar la democracia?

Desde luego, no se trata de aplicar o no aplicar adjetivos a una sustancia supuestamente democrática, sino de abandonar el callejón sin salida de la inversión neohegeliana. Por esa razón, una expresión como “capitalismo democrático” recupera, con mayor fidelidad que la frase “democracia burguesa”, el verdadero

significado de la democracia, al subrayar que sus aspectos estructurales y características definitorias – elecciones periódicas y “libres”, derechos y libertades individuales etc. – son, no obstante su importancia, formas políticas cuyo funcionamiento y eficacia no pueden neutralizar, ni mucho menos disolver, la estructura intrínseca e irremediablemente antidemocrática de la sociedad capitalista. Esta estructura, que reposa sobre un sistema de relaciones sociales centradas en la reproducción incesante de una fuerza de trabajo que debe ser inexorablemente vendida en el mercado como una mercancía para garantizar la supervivencia misma de los trabajadores, impone límites insuperables a la constitución de una genuina democracia. Esta “esclavitud asalariada”, como decía Marx, obliga a los trabajadores a acudir al mercado esperando “tener la suerte” de hallar un capitalista que considere rentable la compra de su fuerza de trabajo. En caso de que la fortuna no lo acompañe deberá asegurarse una subsistencia miserable como pueda, lo cual es incompatible con el funcionamiento de un orden democrático.

El resultado es una dictadura *de facto* de los capitalistas, sea cual fuera la forma política – tal como la democracia – bajo la cual esta dictadura se oculta ante los ojos del pueblo. De ahí la incompatibilidad existente entre el capitalismo como forma socioeconómica basada en la desigualdad estructural que separa a compradores de fuerza de trabajo, los capitalistas, y aquellos que deben venderla para sobrevivir, los trabajadores, y la democracia, concebida no solamente en sus aspectos formales y procedimentales sino como un orden político construido sobre una condición generalizada de igualdad.

Percepciones populares

Decíamos más arriba que la frustración y el desencanto signan la respuesta de grandes sectores de las sociedades latinoamericanas ante el funcionamiento de los regímenes (mal) llamados democráticos. La ferocidad de los procesos de restructuración regresiva del capitalismo bajo el influjo del Consenso de Washington y la descuidadización que este provocó al mercantilizar toda una serie de derechos (a la educación, a la salud, a la seguridad social, etcétera) ahora convertidos en bienes a ser adquiridos en el mercado tuvo como resultado el radical debilitamiento del impulso democrático. Lejos de haber ayudado a consolidar las democracias incipientes, las políticas neoliberales las socavaron tal vez sin remedio y las consecuencias se sienten sensiblemente hoy día. La democracia ha llegado a ser esa “cáscara vacía” de la que tantas veces había hablado Nelson Mandela, donde un número cada vez más creciente de políticos corruptos e irresponsables administran los países con una indiferencia absoluta hacia el bien común y el bienestar de la gran mayoría de la población. Prueba de ello es la enorme desconfianza popular hacia los políticos, los partidos y los cuerpos legislativos, un fenómeno visto, con distintos grados de intensidad, en todos los países de América Latina. Algunos estudios empíricos recientes proporcionan información interesante al respecto.

No sorprende, por lo tanto, que un estudio reciente sobre las democracias latinoamericanas efectuado por el PNUD en 18 países de la región y consultando una muestra regional de 18.643 personas entrevistadas concluya que:

- “La preferencia de los ciudadanos por la democracia es relativamente baja;
- Un gran número de latinoamericanos dan prioridad al desarrollo por encima de la democracia y retirarían su apoyo a un gobierno democrático si resultara incapaz de resolver sus problemas económicos;
 - Generalmente, los ‘no democráticos’ pertenecen a grupos con menos educación, cuya socialización ocurrió durante períodos de autoritarismo y quienes tienen bajas expectativas de movilidad social y una profunda desconfianza en las instituciones democráticas y en los políticos; y
 - Aunque se puede encontrar ‘demócratas’ en los diversos grupos sociales, los ciudadanos tienden a apoyar más la democracia en los países que tienen niveles más bajos de desigualdad. Sin embargo, no se expresan mediante organizaciones políticas”.

Estos resultados, por decepcionantes que sean, hablan muy favorablemente de la conciencia política y racionalidad de la mayoría de los latinoamericanos y su evaluación precisa de las deficiencias y promesas incumplidas de sus llamados gobiernos “democráticos”. Si se examinan, al mismo tiempo, los datos más recientes producidos por Latinobarómetro en su encuesta de opinión pública internacional de 2004 se podrán graficar los altos grados de descontento con el desempeño de los gobiernos democráticos en los países de los propios entrevistados. Así, mientras que en 1997 el 41% de los encuestados en la región declaraban estar satisfechos con la democracia, en 2001 el porcentaje había caído al 25% y para volver a elevarse muy moderadamente en 2004 al 29%. En otras palabras, la satisfacción con el desempeño de los gobiernos democráticos en este período 1997-2004 descendió 12 puntos porcentuales. Conviene subrayar el hecho de que sólo tres países se desviaron de esa tendencia a la baja: Venezuela, que irónicamente es el blanco favorito de la cruzada democrática iniciada por la Casa Blanca, donde el porcentaje de la población que se manifestó satisfecho con el régimen democrático aumentó siete puntos; Brasil y Chile, donde la proporción creció cinco y tres puntos porcentuales, respectivamente. Los países que sufrieron los más dramáticas descensos en el índice de satisfacción democrática fueron México y Nicaragua, dos gobiernos muy estrechamente asociados con los Estados Unidos y fieles seguidores del “Consenso de Washington”, que perdieron casi treinta puntos porcentuales. El Chile de Lagos, a su vez, ilustra una paradoja inquietante para la teoría convencional. El país considerado modelo de una transición exitosa hacia la democracia, por sus supuestos éxitos en materia económica y política, exhibe una alta proporción de ciudadanos malagradecidos que no fueron persuadidos de las bondades de la democracia chilena por el aplauso de los expertos en ciencias sociales y las voces reconfortantes de las instituciones financieras internacionales. Tanto es así que en 1997 sólo el 37% de los chilenos se pronunciaron satisfechos con el gobierno democrático racional y responsable de “centroizquierda” de la Concertación. Luego de un descenso repentino al 23% en 2001, desencadenado a causa de la preocupación suscitada por una caída económica, en 2004 la proporción de los satisfechos subió al 40%, un incremento importante pero, no obstante, una cifra que difícilmente se pueda considerar saludable.

Dada esta desilusión con el desempeño de los gobiernos democráticos latinoamericanos, no es sorprendente enterarse que el apoyo a la idea misma de un régimen democrático también haya caído entre 1997 y 2004. Mientras que en 1997 el 62% de los encuestados afirmaron que preferían la democracia antes que a cualquier otro régimen político, en el año 2004 esa preferencia había caído al 53%. Y, en respuesta a otra pregunta, nada menos que el 55% de la muestra dijo que estar dispuesto a aceptar un gobierno no democrático si fuera capaz de solucionar los problemas económicos que aquejaban el país. En este cuadro de legitimidad democrática menguante, fomentado por el desempeño decepcionante de supuestos gobiernos democráticos, una vez más habría que subrayar una excepción sobresaliente: el caso de Venezuela, donde el apoyo al régimen democrático como un ideal trepó del 64% al 74% entre los años 1997 y 2004. Este país ya encabeza la lista de las naciones latinoamericanas en cuanto a apoyo a los regímenes democráticos, planteando otra paradoja inquietante: ¿cómo entender que sea precisamente Venezuela, país que Washington sataniza por su supuesta baja calidad institucional, la naturaleza ilegítima del gobierno de Chávez y otras tantas descalificaciones similares, exhibe el más alto apoyo a la democracia en la región?

Un dato interesante a tener en cuenta: cuando a los entrevistados se les preguntó si estaban satisfechos con el funcionamiento de la economía de mercado, solamente el 19% respondió afirmativamente, y en ningún país en la región la cifra llegó a representar la mayoría de la población. Por supuesto, ninguno de los gobiernos “democráticos” de la región ha demostrado estar interesado en conocer las razones de tamaña ilegitimidad de la economía de mercado ni, mucho menos, de querer hacer algo al respecto. Por ejemplo, podría convocar a un plebiscito para decidir si un régimen económico tan impopular merece ser sostenido en contra de la opinión abrumadora de aquellos que, supuestamente, son los soberanos de la democracia. Esta sería la única respuesta democrática concebible, pero nuestros gobiernos “democráticos” ni sueñan en alterar el sopor del demos promoviendo iniciativas tan peligrosas.

Una última reflexión. La encuesta solicitó a una muestra de 231 líderes en la región (que incluyó varios ex presidentes, ministros, altos funcionarios del estado, presidentes de empresas, etc.) que identifiquen quién realmente ejerce el poder en sus respectivos países. Las respuestas no pudieron ser más esclarecedoras: el 80% de la muestra señaló que el poder lo detentan las grandes empresas y a los sectores financieros; complementariamente, el 65% mencionó a la prensa y los grandes medios. En comparación, solamente el 36% identificó la figura del presidente como alguien en posición de ejercer el poder real, mientras que el 23% de los encuestados dijo que la Embajada Norteamericana es un importante contendiente del poder en los asuntos locales. ¿Podemos llamar democráticos a regímenes con estas características?

II. El protagonismo de los movimientos sociales

Las decepcionantes limitaciones de las democracias latinoamericanas y la crisis que atraviesa los partidos (y también a los sistemas de partidos) permiten

entender el creciente papel desempeñado por los movimientos sociales en la configuración del curso de los procesos democráticos en la región. En otras palabras, la deslegitimación de la política y los partidos ha abierto un espacio para que “la calle”, esa figura amenazante de las democracias liberales, adquiera un protagonismo extraordinario en la mayoría de los países. Esta presencia de las masas—saludada, recordémoslo, por Maquiavelo, como uno de los indicios de la salud de la república—refleja además la total incapacidad de los fundamentos legales e institucionales de las “democracias” latinoamericanas para resolver las crisis sociopolíticas dentro de los procedimientos establecidos constitucionalmente. A raíz de esto la realidad de la vida política se torna ilegal, mientras que la legalidad de las instituciones se derrite al calor de la crisis política permanente. Revueltas populares derrocaron gobiernos reaccionarios en Ecuador en 1997, 2000 y 2005; y en Bolivia, sublevaciones de grandes masas de campesinos, indígenas y pobres urbanos destronaron gobiernos derechistas en 2003 y 2005, abriendo paso a la formidable victoria electoral de Evo Morales a finales de este último año. La dictadura “constitucional” de Alberto Fujimori en Perú fue derrocada por una impresionante movilización de masas durante el año 2000, y el año siguiente, el presidente de la supuesta “centroizquierda” de Argentina, Fernando de la Rúa, que había traicionado sus promesas electorales de abandonar las políticas neoliberales rápida y firmemente, fue desalojado del poder por un levantamiento popular sin precedentes.

Lo que estas rebeliones populares también comprueban es que este largo período de un cuarto de siglo, o más, de gobiernos neoliberales — con todo su equipaje de tensiones, rupturas, exclusiones y niveles crecientes de explotación y degradación social — creó las condiciones objetivas para la movilización política de grandes sectores de las sociedades latinoamericanas. Ahora bien: ¿son las revueltas plebeyas arriba mencionadas meros episodios aislados, gritos de rabia y furia popular, o reflejan una dialéctica histórica mucho más compleja y profunda? Una mirada sobria a la historia del período democrático abierta a comienzos de los años ochenta revela que no hay nada accidental en la creciente movilización de las clases populares ni en el final tumultuoso de tantos gobiernos democráticos en la región. Es por eso que por lo menos dieciséis presidentes — casi todos ellos obedientes clientes de Washington — tuvieron que apartarse del poder antes de la expiración de sus mandatos legales, derrocados por rebeliones populares. Algunos tuvieron que ceder su poder anticipadamente, como Alfonsín, en Argentina, quien lo entregó seis meses antes de la conclusión de su mandato debido a una combinación intolerable de descontento social, disturbios sociales e hiperinflación. En Bolivia, Siles Suazo tuvo que llamar a elecciones presidenciales anticipadas en 1985 sin poder completar su mandato. Fernando Collor de Melo de Brasil en 1992 y Carlos Andrés Pérez de Venezuela en 1993 enfrentaron juicios políticos y fueron echados de la presidencia acusados de corrupción en medio de grandes oleadas de protesta popular. Los demás fueron derribados en contextos de severas crisis socio-económicas. Además, los plebiscitos convocados para legalizar la privatización de empresas estatales o servicios públicos invariablemente defraudaron las expectativas neoliberales, como en el caso de Uruguay (obras sanitarias y terminales portuarias) y el abastecimiento de agua en Bolivia y Perú. También hubo grandes levantamientos

populares para pedir la nacionalización del petróleo y el gas en Bolivia; oponerse a políticas de privatización – del petróleo en Ecuador, la compañía telefónica en Costa Rica y los sistemas de salud en varios países –; poner fin al saqueo de los bancos extranjeros, como en Argentina; y terminar con los programas de erradicación de coca en Bolivia y Perú.

Organización, conciencia, estrategia

Hay dos lecciones que se pueden desprender de este nuevo ciclo de movilizaciones populares en América Latina. Primero, que las masas populares han adquirido una inédita capacidad para desalojar del poder a gobiernos antipopulares, pasando por encima de los mecanismos establecidos constitucionalmente que no por casualidad se caracterizan por su fuerte prejuicio elitista y por un ethos que, a falta de mejor palabra, podríamos llamar como fuertemente “demofóbico”, es decir, fobia al pueblo. Para la cultura política dominante en las así llamadas democracias latinoamericanas la política es un asunto de elites, y el pueblo no debe inmiscuirse en las transacciones y componendas realizadas por los caballeros en cuyas manos descansa el gobierno. Pero, por otro lado, hay una segunda lección y esta nos enseña que esta activación saludable de las masas fracasó a la hora de construir una alternativa política que no sólo pusiera fin a gobiernos antipopulares sino que condujera también a la superación del neoliberalismo y la inauguración de una etapa post-neoliberal. Los levantamientos heroicos de las clases subordinadas tuvieron un talón de Aquiles fatal resultante de la convergencia de tres fenómenos fuertemente interrelacionados: (a) la fragilidad organizativa; (b) la inmadurez de la conciencia política y, (c) el predominio absoluto del espontaneísmo como modo normal de intervención política.

En efecto, la indiferencia suicida frente a los problemas de la organización popular, la conciencia y la estrategia y táctica de lucha plantea numerosos interrogantes. Por ejemplo, en relación a las cuestiones de organización: ¿partidos, sindicatos, movimientos sociales, asambleas populares, piquetes, caracoles zapatistas, formas precolombinas de organización (como las que existen en el mundo andino)? ¿Cuáles son las formas organizativas que requiere la lucha popular en el contexto del capitalismo contemporáneo y la que se deriva de la coyuntura particular de cada uno de nuestros países? En relación al tema de la conciencia radical y emancipatoria, por no decir revolucionaria, ¿cómo asegurar que los movimientos desarrollen ese tipo de conciencia, a partir de la convicción de que en ausencia de una teoría emancipatoria, o revolucionaria, difícilmente podrá haber acciones emancipatorias o revolucionarias? Si, como algunos dicen, el modelo kautskiano de la conciencia radical introducida “desde afuera” por intelectuales revolucionarios ha fracasado, ¿qué decir de la estrategia gramsciana de construcción de contrahegemonía, disputando la hegemonía de las clases dominantes desde las trincheras de la sociedad civil? ¿Ha triunfado? ¿O tal vez deberíamos remitirnos a la obra de Paulo Freire, el gran educador brasileño, para explorar las posibilidades abiertas por su estrategia educativa de “concientización”? Por último, en relación a la cuestión de la estrategia y táctica, digamos que pese a la reconfiguración de los sujetos sociales (producto, entre otras cosas, de las transformaciones en las relaciones

capitalistas de producción) la adopción de una estrategia y una táctica adecuadas sigue siendo un asunto de primordial importancia. Esta problemática no tiene lugar en la obra de Hardt y Negri porque en ella los movimientos sociales son las expresiones infinitas de la multitud y esta, por su carácter descentrado, desterritorializado, molecular y nomádico, impide siquiera pensar en cuestiones estratégicas y tácticas. Lo mismo ocurre en la obra de John Holloway, que nos invita a dejar de lado toda pretensión de conquistar el poder, y de lo cual se desprende la superfluidad de cualquier discusión sobre estrategia y táctica de lucha popular. Contra estas versiones contemporáneas del romanticismo político es necesario reafirmar, con fuerza, una vez más, la importancia de estas cuestiones.

¿Alternativas?

En síntesis, el desarrollo de una adecuada organización, conciencia política radical y de apropiadas estrategias y tácticas de lucha política han sido factores principales en la explicación de los magros logros de las rebeliones populares que conmovieron la escena política latinoamericana de los últimos años. Es cierto: los gobiernos neoliberales fueron reemplazados, pero por otros parecidos, quizás dispuestos a utilizar un discurso antineoliberal, pero al fin y al cabo leales a los mismos principios que inspiraban la acción de los destituidos. Al mismo tiempo, la imponente movilización de las masas se esfumó en el aire poco después de consumado el desalojo del gobierno pero sin haber sido capaz de plasmar un nuevo sujeto político imbuido de los atributos necesarios para consolidar la correlación de fuerzas existente y evitar la recaída a situaciones anteriores. No ajena a estos lamentables resultados es la asombrosa popularidad obtenida en amplios sectores del activismo político de izquierda y – en mucho menor medida, en el corpus de las clases populares – por las ya referidas nuevas expresiones de romanticismo político, como la exaltación de Hardt y Negri de las virtudes de la multitud amorfa, desorganizada y sin estrategia política; o las furibundas diatribas de Holloway contra partidos y movimientos que, neciamente renuentes a aprender de las lecciones dolorosas de las revoluciones sociales del siglo veinte, todavía se empecinan en conquistar el poder político.

No obstante, hay que tener en cuenta que la debilidad del ímpetu popular al momento de construir una alternativa no solamente se observó durante transferencias de poder “extraconstitucionales”. También fue evidente en los casos de gobiernos elegidos de acuerdo a las prescripciones institucionales después del colapso económico del neoliberalismo. Los casos de Lula en Brasil, Kirchner en Argentina y Vázquez en Uruguay muestran claramente, especialmente el primero, la impotencia de las clases subordinadas para imponer una agenda posneoliberal, inclusive en gobiernos elegidos por el pueblo y precisamente para ese fin. Si durante las situaciones de turbulencia política las masas derrocan al gobierno de turno y luego se desmovilizan y repliegan, en los casos de recambio constitucional la lógica política ha sido sorprendentemente similar: las masas votan y después vuelven a sus casas, dejando que las personas que supuestamente “saben” cómo administrar el país y manejar la economía hagan su trabajo por ellos. Y tal como en los casos del reemplazo presidencial por

medio de sublevación popular, los resultados no podrían ser más decepcionantes.

Sin embargo, a pesar de esos defectos, la capacidad sin precedente de las masas populares en Latinoamérica para derrocar gobiernos antipopulares introdujo un nuevo factor en la escena política que había estado ausente. Y lo que es más, la apuesta fuerte de Chávez a favor de la democracia participativa y las consultas populares constantes – elecciones generales, reformas constitucionales, plebiscitos, referendos revocatorios de mandato, etc. – ha alimentado la formación de una nueva conciencia política entre grandes segmentos de las clases trabajadoras que ya ven en las iniciativas políticas de Chávez una puerta abierta, de par en par, para experimentar con nuevas formas de democracia que ampliamente superan el formalismo hueco de la “democracia representativa” que rige en los demás países. Aún es demasiado pronto para saber si los movimientos democráticos incipientes y originales que hoy en día están guiando la política venezolana serán imitados en otras latitudes, o si el experimento bolivariano dirigido por Evo Morales llegará a superar los estrechos límites del capitalismo democrático y tentar a otras naciones a seguir su camino. Sus más recientes medidas, principalmente la nacionalización de los hidrocarburos, permiten abrigar serias esperanzas. El renacimiento impactante de la popularidad de la Revolución Cubana y su líder, Fidel Castro, en toda Latinoamérica, y la reputación ganada recientemente por Hugo Chávez, su Revolución Bolivariana, su llamada permanente a la legitimación popular como medida para restaurar a la presidencia las prerrogativas de la “primera magistratura”, y su permanente afirmación de que la solución para los males de la región solamente se puede encontrar en el socialismo, y no en el capitalismo – una declaración atrevida que había desaparecido de los discursos públicos en Latinoamérica – son claras señales de que el ánimo popular está cambiando en la región. En este sentido parece oportuno examinar, una vez más, las enseñanzas derivadas de la experiencia de la revolución cubana que pese al criminal bloqueo al que se ve sometida desde hace casi medio siglo ha logrado garantizar para sus hijos un nivel de salud, educación y seguridad social incomparablemente superior al de cualquier otro país de la región.

Los formidables obstáculos con que Chávez se enfrenta – el hostigamiento descarado de los Estados Unidos desde adentro y afuera, intentos golpistas, criminalización internacional, sabotaje económico, manipulación de los medios, etc. – y el que ya se cierne sobre Bolivia, y el que se ha ensañado con Cuba desde los orígenes de la revolución, se erigirán también contra cualquier otro proyecto radical que se ponga en marcha en cualquier otro país de la región. Ellos también deberán enfrentar desde las salvajes “condicionalidades” del FMI y el Banco Mundial hasta todo tipo de extorsión y chantaje económico y diplomático. Es probable que el progreso de un proceso genuino de democratización, no el simulacro que tenemos hoy, desate un baño de sangre. Nuestra historia muestra que aún los proyectos reformistas más tímidos desencadenaron rabiosas contrarrevoluciones. ¿Será diferente esta vez?